

México: Buscar la verdad desde el periodismo

por **Marcela Turati**, periodista | marcelaturatim@gmail.com

Cuando en 2017 iniciamos nuestra investigación sobre fosas clandestinas en México, tres reporteras fuimos a un baño ritual en Cherán, un pueblo indígena que en México simboliza la resistencia para cuidar los bosques y la vida. El curandero que guiaba escuchó cuando dijimos que empezaríamos un recorrido por cementerios ocultos en el país y nos aconsejó que no lo hiciéramos, que sería echar vida a la muerte, energía buena a la mala.

Nosotras, de todos modos, continuamos nuestro camino hacia los sitios donde las personas son enterradas ilegalmente, pero en pocos días desistimos. Nos dimos cuenta de que esos sitios siguen siendo lugares prohibidos.

Intentábamos documentar las fosas descubiertas durante los años en que los mexicanos hemos sido sometidos a la fallida estrategia de seguridad llamada “guerra contra las drogas”, era nuestra forma de contribuir desde el periodismo a las búsquedas que realizan diariamente por el país colectivos de familiares que buscan a sus parientes que han sido desaparecidos. También una manera de medir la evolución de la catástrofe desatada a partir de la política antidrogas.

En México, por la catastrófica militarización y estrategia de fragmentación de grupos del crimen organizado, cambiaron las leyes de la vida: los hijos ya no son quienes entierran a sus padres, ahora los padres son quienes desentierran a sus hijos ocultos en fosas clandestinas.

La violencia nos encontró a los periodistas poco preparados para cubrir el horror de lo indecible. No sólo nos convertimos en corresponsales de guerra sin salir de nuestra tierra, también mutamos de identidad, de rol, de percepción del mundo y de maneras de hacer periodismo.

En mi caso, de ser una reportera que se dedicaba a cubrir temas relacionados con la inequidad y los resultados de los programas sociales destinados a combatir el hambre, de pronto empecé a cubrir masacres, desplazamientos forzados de gente que huía de la violencia, programas sociales destinados a alimentar a niños huérfanos porque alguno de sus padres había sido asesinado y a recibir reportes de personas —la mayoría hombres y jóvenes— que sin ninguna razón habían sido desaparecidos.

Muchos periodistas como yo, de ser periodistas normales, terminaron convertidos en reporteros desde las fosas.

Pero antes hubo un largo recorrido.

Desde 2008 comencé a documentar las historias de las familias que primero recurren a oficinas de gobierno pidiendo que busquen a sus familiares llevados por la fuerza o sencillamente un día no llegan a casa. Pronto comencé a ver que esas familias habían empezado a encontrarse con otras y creaban grupos de familiares en búsqueda. Asistí a talleres educativos donde intercambiaban información —las madres de ciudad Juárez eran las maestras—, aprendían técnicas de rastreo, hablaban sobre sus derechos y proyectaban acciones para hacerse oír ante las autoridades sordas. Registré los recorridos de las familias por el laberinto lleno de puertas falsas que es la burocracia y, como ellas, descubrí que la política de Estado es la impunidad. Constaté las incansables exigencias de las familias hacia los gobiernos estatales para que crearan fiscalías especializadas que rescataran a sus seres queridos y para que aprobaran leyes que penalizaran el crimen de la desaparición de personas. Acompañé a las madres de estas personas desaparecidas en sus marchas, que luego derivaron en caravanas por todo el país y

el extranjero, plantones o huelgas de hambre afuera de oficinas de gobierno. Escribí sobre sus recorridos por las morgues, donde eran sometidas a la tortura de mirar fotografías de restos humanos para ver si reconocían algún rasgo de sus hijos e hijas; escribí acerca de su peregrinación por los cementerios donde solicitaban informes sobre los cuerpos no identificados enterrados en las fosas comunes; relaté sus demandas de que se creara un registro nacional de cuerpos no identificados y un banco nacional de ADN para que no tuvieran que extraerles una muestra de sangre en cada lugar donde denuncian la desaparición de sus familiares.

Invariablemente, a esas familias las encontraba cada vez que se anunciaba el hallazgo de alguna fosa común clandestina. Solían pedir informes sobre las características de los cuerpos, querían ver las fotografías o asomarse a la fosa para ver si reconocían alguna pertenencia, alguna prenda de vestir, la dentadura o el tatuaje que les permitiera identificar a su ser querido y llevárselo a su casa, de donde no debía de haber sido arrancado.

Con el tiempo comenzaron a pedir a las autoridades que exhumaran los terrenos donde enterraban los cuerpos; que las dotara de perros entrenados para rastrear cadáveres; que se utilizara tecnología especializada —aparatos con ultrasonidos o georradars— que les permitiera ubicar dónde había sido removida la tierra. Después las vi removiendo la tierra con sus propias manos, creando herramientas para perforarla, haciéndose expertas en desenterrar los cadáveres. Y, algunas pocas veces, coincidió con que en esos cementerios ocultos alguna de ellas encontró a su propio hijo.

Vimos esta transformación: de madres que suplicaban a las autoridades que buscaran a sus hijos, ellas se fueron convirtiendo en detectives que investigan el paradero de los suyos. Se metieron a cárceles para tratar de convencer a delincuentes detenidos que les den alguna pista de dónde encontrar a sus seres queridos, se hicieron activistas de derechos humanos que inventaron leyes para mover al estado que busca a quienes faltan (y muchas veces también desaparece a los desaparecidos), en forenses ciudadanos expertas en genética y luego en rastreadoras de fosas que

salen al campo a buscar esos entierros donde los perpetradores intentaron borrar a seres humanos y ocultar su crimen.

Al mismo tiempo que el país entre la niebla de la violencia se cubría con una sombra de horror, la cobertura periodística se transformó en una crónica interminable de cadáveres, restos humanos y fosas comunes. También se abrieron paso historias de dignidad y resistencia, de madres desesperadas que, en busca de sus hijos, se transforman en luminosas buscadoras de todas las personas desaparecidas.

En el año 2001 fui a mi primera exhumación: fue cuando entró el gobierno de la llamada transición —el que derrotó al PRI— cuando se permitió la búsqueda de los restos del guerrillero Lucio Cabaña, un héroe de los años 70, durante la guerra sucia. Esos crímenes del pasado nunca fueron juzgados. La impunidad generó el caldo de cultivo para la nueva oleada que hoy vivimos donde se calcula que entre 2006 a 2018 más de 40 000 personas han sido desaparecidas. El ritmo continúa: al día son desaparecidas un promedio de 3 personas.

Las desapariciones no son como las de los años 70 donde a las personas se las llevaba a los cuarteles militares o prisiones clandestinas. En la trama entran múltiples actores y las causas son diversas.

La desaparición más espectacular fue la de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014. Los estudiantes fueron detenidos por policías municipales de Iguala —a una hora de Taxco— que formaban parte del grupo del narcotráfico Guerreros Unidos, cuyos sicarios participaron en el operativo en presencia de la Policía Federal, la estatal y los militares, y ante las cámaras de la televisión. Eran 43 estudiantes pobres, indígenas, de una escuela donde se enseña el socialismo.

La noticia conmocionó a todo el país. La gente salió a las calles a exigir la devolución de los estudiantes con vida y que se hiciera justicia bajo un mismo grito: “Fue el estado”.

La búsqueda masiva de los estudiantes inauguró el permiso de muchos otros colectivos de familiares por todo el país que salieron a los cerros a buscar sitios de eliminación de personas. Pronto comenzaron a encontrar cadáveres completos, aún con la mordaza en la boca y las manos atadas. En otros lugares lo hallado ya no eran osamentas sino fragmentos de huesos calcinados, pues la pretensión de sus verdugos era convertirlos en trozos de carbón o disolverlos en ácidos.

Pronto las familias iban convirtiendo su conocimiento forense empírico en sabiduría y convocaron encuentros para enseñar a colectivos de familias de todo el país a desarrollar sus propias herramientas de rastreo —palas, varillas, picos—, a intercambiar experiencias sobre cómo identificar los sitios donde la tierra fue removida, cuántos centímetros deben excavar para no romper esqueletos, a qué hacer cuando se encuentran osamentas, cómo conservar las pruebas. En suma: cómo hacer el trabajo que el gobierno no hace de localizar cuerpos.

En estos años, muchas veces desde los colectivos de periodistas (mayoritariamente de mujeres) de los que he formado parte, hemos emprendido proyectos colectivos, colaborativos y multidisciplinarios como una manera de ayudar a las familias en las búsquedas y de ayudarnos a nosotras a entender lo que nos ha pasado en estos años de guerra y de dar sentido a lo vivido. Mencionaré en este artículo los que lideré.

#EntreLasCenizas

<https://entrelascenizas.periodistasdeapie.org.mx/>

Al final del sexenio de Calderón, en 2012, muchos periodistas sentimos que las historias de las víctimas de la violencia habían sido narradas desde el derrotismo y el dolor, y no desde la dignidad de las personas que resisten. Con este libro colectivo reconstruimos 12 historias en las que intentamos reeducar la mirada, No solo se trataba de narrar la violencia y sus impactos sino de dar una parte

importante de lo que la gente había construido para afrontar esos impactos: las organizaciones que fundaron, la resistencia colectiva, lo que lograron.

#Másde72

<https://masde72.periodistasdeapie.org.mx>

Con la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, y el hallazgo de las fosas clandestinas, en abril de 2011, los periodistas nos propusimos recolectar todas las hipótesis posibles, aclarar los hechos, recrearlos, hablar de las víctimas, exponer.

Construimos una gran base de datos de cuerpos encontrados en las fosas y sus descripciones, en un intento de que esos cuerpos aún sin identificar en esos campos de exterminio puedan recobrar su identidad, y sus familias la paz al enterrarlos cerca.

#PeriodistasConAyotzinapa

Cuando bajábamos de las fosas de La Parota, el sitio donde se habían exhumado 18 cadáveres que se decía que eran los estudiantes de Ayotzinapa, y vi a mis colegas periodistas y fotógrafos destrozados, convocamos a trabajar sobre una imagen que captara un instante en el que pudiéramos separarnos del horror de lo indecible, y de una manera narrativa, expresar lo que sentíamos y hablar de las posibilidades.

#PaísdeFosas

<https://quintoelab.org/project/el-pais-de-las-2-mil-fosas>

En 2017 varias de nosotras teníamos la sensación de que publicar los testimonios de las víctimas de la violencia ya no era suficiente, que era el momento de buscar lógicas al horror ante la necesidad de entender lo inexplicable: que en sólo 12 años más de 40 000 personas han sido desaparecidas en México.

Nos preocupaba que los restos de personas encontrados en esos entierros clandestinos se perdieran, que el gobierno los borrara de nuevo como muchas veces ocurre, que los desapareciera de la morgue, que los volviera a enterrar o los

dejara sin registro. Que las pertenencias que las acompañaban no fueran debidamente registradas y resguardadas.

Con esa intención emprendimos este proyecto que pensábamos sería de un par de meses, pero que duró años de trabajo hormiga, colectivo, colaborativo y multidisciplinario. Hecho desde distintas ciudades, sin dinero, sólo con la urgencia de hacer ese registro que tocaba hacer a las autoridades y no hicieron.

Nos decidimos a desenterrar las cifras ocultas. Sabiendo que no son cifras, son personas, y que cada número representa a alguien que nos falta y una familia que está buscando sin descanso.

Nos enfrentamos a la burocracia construida para que no encuentres, para que te canses, para que desistas. Sentimos mucha impotencia, claro que la nuestra nunca fue comparable con lo que la indolencia gubernamental hace sufrir cada día a las familias.

Pudimos arrancar información, muchas veces errónea o incompleta, a 24 de las 32 fiscalías del país. Los ocho estados restantes dicen que no tienen registro de fosas y sabemos que en siete no es así. Tuvimos que pelear por la respuesta más ajustada a la realidad, consultar a periodistas por las fosas de sus estados borradas de registros.

Así, hicimos el reportaje “El país de las 2 mil fosas” y los mapas que ilustran el resultado de la fallida política de la guerra contra las drogas. Este trabajo da cuenta del número de fosas encontradas en cada estado, en cada municipio, el número de cuerpos, el número de personas identificadas.

Cuando lo presentamos nos acompañaron algunas madres buscadoras y familiares dedicados por años a esa búsqueda. Uno de ellos, Mario Vergara, que con instrumentos y conocimientos del campo busca a su hermano, al ver el mapa dijo que esa es la prueba de lo que siempre han dicho y nunca les escucharon: que México es un país de fosas.

Al final una madre nos pidió ver a detalle un punto en Durango y específicamente el año 2011; quería saber cuántas fosas fueron encontradas. Su hija desapareció ese año en ese estado. Esa información podría ser una pista adicional para buscar.

Supimos que algunos colectivos de víctimas usaron nuestro trabajo para exigir a las fiscalías la información que tenían y que ocultaban. Notamos también en varias el silencio, porque este trabajo es doloroso.

Para nosotras esa fue la forma que encontramos de hacer visible la catástrofe que estamos viviendo. Nuestra propia excavación en esas fosas.

Nuestra metodología no sólo fue de conteo de datos, sino también una metodología emocional que desarrollamos y en la que aprendimos a cuidarnos entre nosotras, a escucharnos y escuchar cuándo era tiempo de parar, cuándo era momento de publicar y cuándo emocionalmente no podíamos dar más.

Los ejemplos aquí expuestos son una muestra del poder del periodismo que, aunque no nos toca ver que tenga un efecto inmediato, considero que es trabajar como en una Comisión de la Verdad en Tiempo Real, porque la información estará ahí cuando la justicia sea posible, cuando en México la hagamos posible. Con la esperanza de que esta información pueda servir para encontrar a las personas desaparecidas y que tengan un entierro digno y este crimen no quede impune y no se repita. //